

# Justicia ambiental

**TATIANA ACEVEDO GUERRERO**



EN ESTE SEPTIEMBRE QUE ACABÓ, manifestantes de los municipios de San Vicente de Chucurí y Barrancabermeja bloquearon siete pozos de Campo Lizama, de Ecopetrol. Todos piden una mayor inversión social en la zona, que ha sido área de operación de la empresa por décadas. Se trata de exigencias básicas: inversión en los acueductos veredales, las vías, los puestos de salud, construcción o arreglo de escuelas veredales y acceso a la información sobre manejo ambiental que se le está dando a su entorno. A la atmósfera en que viven y respiran. El comité de concertación de La Lizama, integrado por 19 juntas de acción comunal de ambos municipios, explicó que “Ecopetrol no ha cumplido con

un pliego de exigencias de 13 puntos sobre una serie de problemáticas sociales, ambientales, laborales, de bienes y de servicios”. Entre las peticiones más urgentes la comunidad pide tener voz e influencia en la versión final del Plan de Manejo Ambiental Integral de Mares, que regularía las operaciones en años venideros.

Fue esta misma comunidad la que en 2018 le hizo frente a la destrucción de su paisaje, cuando los errores en la operación del Pozo 158 del campo La Lizama ocasionaron el derrame de 550 barriles de petróleo, gas y lodo en 49 ríos, arroyos y caños de Santander. En total se contaminaron 24 kilómetros de la quebrada La Lizama y Caño Muerto, además del río Sogamoso. En marzo de este año los pescadores de la zona vivieron temores similares cuando vieron otro derrame de crudo en la quebrada La Lizama, producido por una fuga en una línea de producción del Pozo 19.

En su momento Ecopetrol activó un plan

de contingencia para contener y limpiar el crudo. Sin embargo, ese crudo ha hecho parte de los peces, del aguay de los cuerpos de distintas generaciones por casi un siglo. De hecho, en 1966, una explosión en el Pozo 13 del mismo campo, a aproximadamente 40 kilómetros de Barranca, desencadenó grandes incendios. “Los arroyos de petróleo se deslizan sobre la quebrada La Lizama que desemboca en el río Sogamoso... Los campesinos han tenido que recoger para sus servicios agua petrolizada y el ganado beber de la misma con consecuencias no previstas hasta ahora”, reportó entonces el periódico *Vanguardia Liberal*.

Quienes habitan el corredor entre San Vicente de Chucurí y Barrancabermeja respiran el aire impregnado de crudo, a la vez que esperan estas inversiones prometidas. Entretanto, reportes de organizaciones de la sociedad civil hablan de problemas respiratorios, gastritis, cáncer y depresión en la zona. Los pescadores temen

trabajar en los ríos cercanos a los derrames. Las personas temen nadar en los ríos no solo por miedo al crudo, sino por contaminaciones de aguas negras debido a la falta de inversión en sistemas de alcantarillado inadecuados o los subproductos de la refinería.

El petróleo ha venido dejando por tanto tiempo un legado de desazón, asociado por un lado con el optimismo de días mejores, en los que las riquezas se vean en oportunidades y progresos, y a cierta angustia sobre el presente de aires irrespirables y verdades incómodas. De niña y adolescente vi a varias compañeras del colegio, todas con padres trabajadores de la refinería, enfermarse de cánceres agresivos o enfermedades difíciles de diagnosticar. Tratando de hacer sentido sobre la tragedia, nadie decía nada sobre las coincidencias. Todo se hacía más difícil en un ambiente de agradecimiento con la empresa, que daba trabajo y pagaba los servicios médicos.

## Perú, entre la crispación y la mediocridad

**EDUARDO DARGENT**

**Cartones de Garzón**

LAS NOTICIAS SOBRE LOS CRISPADOS primeros dos meses de gobierno del presidente del Perú, Pedro Castillo, podrían hacernos pensar que estamos viviendo un caso más de polarización ideológica entre izquierda y derecha en América Latina. Pero es una lectura limitada. Es más importante observar el peso de los errores y la ausencia de liderazgo de Castillo, un exlíder sindical de izquierda.

El futuro, por ahora, se ve más mediocre que radical. Es un costo demasiado alto para uno de los países más golpeados —sanitaria y económicamente— por la pandemia y que arrastra al menos media década de inestabilidad política.

El Perú vive en una profunda crisis política. Hemos tenido cinco presidentes en cinco años. Desde 2016, la historia política del Perú ha sido un incesante vaivén de inestabilidad.

Así que el nuevo gobierno tenía la responsabilidad de responder a las expectativas de sus votantes y desactivar el clima de convulsión y desesperanza. Pero hasta ahora no hay señas de que Castillo sea quien pueda ayudarnos a cambiar este rumbo vertiginoso.

El gobierno de Castillo, ese que la derecha dura señalaba de tener un milimétrico proyecto para acabar con la democracia, parece no tener un plan a secas. Menos uno para darle estabilidad y dirección al país.

Desde la campaña eran evidentes los retos que enfrentaría el gobierno. Castillo llegó al poder con poco más de 40.000 votos de ventaja sobre la derechista Keiko Fujimori tras un proceso en el que mostró carencias importantes: inexperiencia gubernamental, ausencia de cuadros técnicos en su entorno y rasgos de radicalismo en su propio discurso y en el del partido que lo llevó a la presidencia, el marxista-leninista Perú Libre.

Cuando se confirmó su ventaja electoral, Castillo lo sabía: tendría una fuerte oposición. Los grupos más extremos montaron una intensa campaña sobre un supuesto fraude electoral sin evidencia alguna. También lo presentaron como un riesgo inminente para la democracia. Por lo tanto, el nuevo presidente debía mostrar distancia suficiente de Perú Libre y su líder, el controversial Vladimir Cerrón. Necesitaba nombrar un gabinete que le permitiera compensar sus limitaciones, transmitir confianza y señales de que gobernaría con eficiencia.

Pero su primer gabinete quedó lejos de esta marca. De primer ministro nombró a Guido Bellido, un personaje cercano a Cerrón, quien ha hecho comentarios misógi-

nos y declaraciones inaceptables sobre violencia política.

Castillo tampoco mejoró la comunicación, un tema que por ahora sobrelleva con su salida a plazas y eventos con organizaciones populares, pero que eventualmente tendrá que trabajar.

Este mal inicio se ve compensado frente a la opinión pública por dos aspectos que le dan cierta estabilidad, aunque precaria, al gobierno. Primero, no hay que minimizar lo que representa Castillo para una parte de la ciudadanía. Es visto como un maestro rural y líder sindical que conoce las carencias de los más pobres y luchará por su bienestar. Estos símbolos son poderosos, y más en un país en el que la desigualdad aumentó durante la pandemia.

Castillo inició su mandato con una aprobación cercana al 40%. Y aún mantiene en buena medida esos índices de popularidad. Los números muestran una división regional y social entre quienes lo respaldan (regiones y clases bajas) y quienes lo rechazan (Lima y clases medias y altas).

El segundo aspecto que da cierta estabilidad al gobierno es el desprestigio del Congreso. Se puede criticar mucho al presidente, pero las turbulencias del Congreso lo hacen impopular. La legitimidad parlamentaria dependerá de que pueda mostrar mejores decisiones que las que critica en el presidente.

La polarización parece haber disminuido un poco en las últimas semanas. El presidente tiene suficientes aliados en el Congreso para mantener a raya el fantasma de la vacancia presidencial que requiere dos tercios de los votos. El Congreso se divide, *grosso modo*, en tercios. Un tercio apoya al gobierno y otro se decanta por la oposición dura. Al centro, los grupos restantes tienen un perfil más pragmático. Ese tercio puede ser la clave de lo que necesita el país: un paso menos ideológico, más moderado y orientado a los resultados. Por ahora, esos legisladores le han dado una tregua al gobierno de Castillo, han apoyado su primer gabinete y tomado distancia de los vociferantes de derecha.

No hay que perder de vista, sin embargo, que esta coalición termina estando más cerca de la oposición que del gobierno. Un escándalo o una caída de popularidad abrupta nos llevaría otra vez al terreno de un juicio político de destitución. Es algo que no necesita el país.

Una solución es subirle el nivel de experiencia al gobierno. Debe mostrar que es posible diseñar una gestión de izquierda con funcionarios y políticos calificados y competentes.

Para el Congreso, el cambio pasa por mostrar que puede ser más certero y estable que el Ejecutivo.

Es indispensable imponer un equilibrio de mejor nivel entre el gobierno de Castillo y el Congreso que beneficie al Perú y destierre la volatilidad política y también la mediocridad de nuestros políticos —de todos los bandos—, más preocupados por sus agendas que por el futuro del país.

Suena poco ambicioso, pero en la situación actual parece fantasía.

(c) *The New York Times*

